

# España somos todos

6 de septiembre de 2024

En los últimos años, España se enfrenta a un desafío histórico, dado que el Gobierno ha instalado en nuestro país una forma de hacer política que ha desplazado el interés general y el bien común, y en la que lo único que importa son las ambiciones políticas personales del actual presidente. Fruto de esta errónea concepción, donde lo que es de todos pasa a ser propiedad de una sola persona, **los españoles padecemos decisiones políticas arbitrarias que dañan nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar.**

Las alianzas con las fuerzas independentistas, elegidas voluntariamente por el Partido Socialista, someten a la Nación entera a una dependencia permanente de los partidos cuyo objetivo político es salir de ella. Un despropósito que acabaremos lamentando y del que serán responsables todos sus dirigentes si no hacen nada efectivo para impedirlo.

La colección de cesiones ya asumidas por el presidente del Gobierno para asegurar su continuidad en la Moncloa ha provocado un deterioro sin precedentes de la salud de nuestro Estado de Derecho. Hoy, a todas ellas se suman las pactadas entre el PSOE y ERC para asegurarse una investidura en Cataluña y una prórroga de la investidura nacional pactada hace menos de un año. Entre ellas, **el peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia**, así como una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale.

A la colonización y degradación de las instituciones, se suma el control de los recursos de todos a conveniencia de sus necesidades personales. Con ello, se consume la quiebra de uno de los valores democráticos más esenciales que protege nuestra Constitución: la igualdad. Desde el punto de vista territorial, por cuanto se desequilibra el sistema en la prestación de servicios públicos, y también desde el punto de vista social, pues los mayores perjudicados serán los ciudadanos que más necesitan esos servicios.

El Estado es responsable de la gestión adecuada de los recursos públicos, así como de su redistribución para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los españoles al margen de su situación económica. **Renunciando todos a los impuestos en una comunidad autónoma, el Gobierno renuncia a una fuente de ingresos para reducir desigualdades** y blinda que una parte de los ciudadanos deje de contribuir en igualdad de condiciones a sostener servicios públicos del Estado, incluidos los que ayudan a redistribuir la renta personal.

Dicho de otro modo, el Gobierno renuncia voluntariamente a su capacidad para combatir desigualdades sociales existentes entre españoles. No en vano, diversos estudios realizados al efecto señalan que aproximadamente un tercio de la redistribución se produce por el efecto de la progresividad de los ingresos, mientras que los dos tercios restantes resultan del adecuado reparto del gasto, especialmente la inversión en Sanidad, Educación y Políticas sociales. No solo se ha de recaudar, sino que se ha de gastar bien, con una orientación de las prioridades adaptadas únicamente a las necesidades de los ciudadanos.

Esta desprotección a los más vulnerables cuenta con la permisividad del Partido Socialista, pero el Partido Popular jamás renunciará a defender la igualdad de todos los españoles. Ante todo, porque somos ciudadanos que no nos resignamos a que cualquier Gobierno disponga de nuestros derechos a su antojo y, como representantes ordinarios del Estado en nuestras respectivas Comunidades Autónomas (CC. AA) y Ciudades Autónomas, porque nos negamos a ver a nuestro país convertido en un mosaico de intereses contrapuestos donde nuestra diversidad y nuestra organización territorial se usen para enfrentar a ciudadanos libres e iguales en derechos.

Los problemas institucionales, sociales y económicos que genera esta decisión trascienden la coyuntura actual y el legítimo debate sobre modelos de financiación. Es nuestro deber señalar el disparate político y moral que entraña dinamitar nuestro modelo de convivencia y replantear todo el sistema de financiación autonómica -que el Gobierno lleva años ignorando, junto con la revisión del sistema de financiación local- por una investidura. Pero, además, queremos advertir de **las perniciosas implicaciones que tendría la aplicación efectiva de esta decisión, y comprometer nuestra unidad y firmeza para evitarlo** con cada herramienta a nuestro alcance.

Desde la mayoría de CC. AA y Ciudades Autónomas de España nos negamos también a asumir el lenguaje independentista que asimila 'Cataluña' a los partidos separatistas y en ese sentido manifestamos **que tampoco nuestros compatriotas catalanes resultarían beneficiados de esta propuesta**, convencidos como estamos de que el objetivo final del independentismo es disponer de la "llave de la caja" para abundar en el desafío del proceso a través de nuevos instrumentos y, por tanto, profundizar en su decadencia.

Así lo han declarado los únicos verdaderos agraciados del acuerdo, los políticos separatistas, para los que la independencia fiscal es el paso previo a culminar la declaración de independencia total que iniciaron en 2017. Ellos, habiendo

constatado que es imposible lograr la independencia sacando a Cataluña del Estado, ahora pretenden obtenerla sacando al Estado de Cataluña, una tarea en la que han encontrado como aliado al actual presidente del Gobierno.

Lo inaudito es que el PSOE haya decidido no solo colaborar con este propósito, sino erigirse en su máximo artífice y defensor, desprotegiendo a la Nación de forma tan irresponsable cuando las fuerzas independentistas reconocen abiertamente que el fin último de los recursos económicos adicionales que pretenden agenciarse a costa de los demás no es fortalecer el bienestar de nadie, sino una estructura administrativa que les permita repetir el golpe de 2017 con mayores garantías. No se trata de una mejor financiación de los servicios públicos, ni tan siquiera en una Comunidad Autónoma. Se trata de financiar, con los recursos de todos, un propósito ideológico excluyente.

Pero, por encima de todo, **queremos afirmar que esta concesión dinamita el sistema de derechos y deberes que nos dimos en la Constitución de 1978** y sobre el que hemos cimentado un Estado social y democrático de derecho, así como una sociedad basada en la igualdad y solidaridad en términos económicos, sociales y de convivencia. La única forma de garantizar el privilegio fiscal al independentismo es perjudicando al conjunto de españoles, singularmente a aquellos que más necesitan de las políticas públicas como elemento de cohesión e igualdad social. Esto constituye una flagrante ruptura de la solidaridad.

Por todo ello, en nuestra condición de representantes de los ejecutivos de doce CC.AA y dos Ciudades Autónomas en las que viven un 70% de los habitantes de nuestro país que defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos y de la Nación, y con el compromiso del presidente nacional de defender estos principios cuando el PP asuma la responsabilidad de gobernar España, manifestamos lo siguiente:

1. **Volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional** entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, **paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo**. Solicitamos a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat que vuelvan a la multilateralidad que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. Lo que es de todos debe decidirse entre todos.
2. **Recuperar las mínimas bases del consenso en una Conferencia de Presidentes cuya convocatoria inmediata exigimos en este acto**. Ese el foro que debe sentar las bases para empezar a trabajar una renovación del actual sistema de financiación. Los presidentes autonómicos no solo defendemos esta reforma, sino que llevamos mucho tiempo reclamándola porque el actual modelo, también acordado en 2009 por el PSOE con el independentismo y sin consenso con el PP, no satisface las legítimas demandas de la mayoría de CC. AA y Ciudades Autónomas. **Exigimos que este modelo sea acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no como resultado de cesiones y en perjuicio a los demás para que el Gobierno encaje el cupo independentista**, así como que la AIReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno.
3. **Condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, y comprometernos por nuestra parte a no romper la multilateralidad en ningún supuesto**. Tanto la actualización del sistema como cualquier cuestión relacionada con el mismo deben abordarse entre todos, a través de los cauces democráticos, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus servicios públicos: no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada, sino en los foros legalmente constituidos. En el caso de la financiación, el CPFF. Nos reivindicamos como presidentes autonómicos a la vez que ciudadanos españoles que creen en un país diverso y unido, y, si otros dirigentes socialistas han renunciado a su modelo de Estado, nosotros no y lo seguiremos defendiendo todos a una. Por tanto, las Comunidades gobernadas por el Partido Popular nos comprometemos a tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello.
4. **Reclamar al Gobierno de España su compromiso, con carácter previo al inicio de los trabajos del CPFF, con el siguiente compromiso y los recogidos en los puntos 5, 6, 7 y 8 de esta declaración. Ampliar el**

**montante económico total del sistema de financiación** autonómica, como hizo el PP en las reformas de 1997 y 2001. Todas las CC. AA y Ciudades Autónomas coinciden en la necesidad de más recursos y, aunque se concretase el incremento prometido por Sánchez, seguiría siendo absolutamente insuficiente. Es inaceptable que el mismo Gobierno que encuentra dinero para las exigencias independentistas, como las embajadas catalanas en el exterior o una estructura administrativa desorbitada, no lo garantice para compensar las necesidades que sí tienen todas las comunidades para prestar servicios públicos. No podemos obviar que en los últimos años el coste de los servicios públicos que prestamos ha crecido de forma exponencial, particularmente la sanidad pública a la que ya dedicamos más del 40 % del presupuesto, por lo que deberá contar con una atención especial en el futuro modelo. Saludar la deuda histórica que el Gobierno central tiene con la dependencia o cofinanciar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, por poner otros ejemplos, también requiere fondos extra.

5. **Solicitar la creación de un Fondo Transitorio** para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Adicionalmente a la financiación que actualmente se recibe, exigimos la creación de un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación, cuya necesidad calificamos de imperiosa. El objetivo de este fondo no es otro que el de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos.
  
6. **Manifiestar la necesidad de garantizar una verdadera cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas procedentes de la UE.** Los fondos europeos tienen impacto probado en el desarrollo económico de los territorios y no pueden aplicarse exclusivamente con la visión de la Administración central. Una gestión compartida de los mismos ayudaría no solo a adecuar el uso de los fondos a la realidad territorial sino sobre todo a asegurar un mayor éxito en términos de ejecución. Hasta ahora, esta colaboración ha aparecido en los documentos teóricos del Gobierno central, pero no el trabajo práctico a la hora de implementar los fondos europeos. **Demandamos que el Ejecutivo ponga de inmediato a disposición de las CCAA más de 18.000M€ de los fondos europeos Next Generation que no ha sido capaz de ejecutar.** Exigiremos que, a medida que se identifiquen más fondos provenientes de remanentes que el gobierno no adjudique, se transfieran a las CCAA,

evitando así la devolución de fondos europeos a Europa.

7. **Blindar el respeto a la autonomía fiscal de las CC. AA.** El Gobierno central pretende la independencia fiscal de Cataluña mientras amenaza con maniatar a las comunidades instándonos a asfixiar a impuestos a los ciudadanos. Rechazamos las críticas a nuestras medidas de alivio fiscal y exigimos respeto a nuestras competencias para mantenerlas. Rechazamos, asimismo, las críticas de un Gobierno que presume defender la diversidad mientras que asesta uno de los mayores ataques al Estado de las autonomías en 46 años de democracia. Privilegiar a unos sobre otros no ahonda en la diversidad, sino en la desigualdad.
8. **Exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se trocee la Agencia Tributaria.** No puede permitirse que se cedan los ingresos a una Comunidad Autónoma y esta siga beneficiándose de los recursos de todos a través de la Seguridad Social. De este modo, las que se quedasen en el régimen común financiarían las prestaciones de ese territorio. Adicionalmente, el PSOE debe reflexionar sobre el hecho de que, si acepta otorgar a una Comunidad las embajadas (política exterior), traspasa el control de fronteras (inmigración) y la llave de la caja (Hacienda), en la práctica ya nada le distingue del independentismo.
9. **Constatar nuestra coincidencia y disposición a abordar conjuntamente en el CPFF la renovación del sistema de financiación atendiendo a todas las variables existentes en cada territorio** que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones. La particularidad y la diversidad territorial de España solo es un problema para quienes las entienden como sinónimo de confrontación. Afirmamos que nadie como los presidentes autonómicos conoce la particular realidad de su comunidad y expresamos nuestro derecho a atenderla en condiciones antes de cualquier modificación del sistema vigente actualmente.
10. Mostrar nuestra **solidaridad con nuestros compatriotas catalanes** que no creen en un desguace del sistema común, convencidos de que sólo beneficiará al negocio del procés que les ha procurado un deterioro de sus servicios públicos y una asfixia a impuestos. También ellos merecen y necesitan un modelo de financiación justo y acordado entre todos. Ahora que el PSOE ha decidido asumir las tesis independentistas, abandonarles y

traicionarles como hicieron en toda España, el PP seguirá a su lado. Sólo el fanatismo ideológico puede afirmar que para defender a Cataluña haya que perjudicar al resto de españoles, y sólo la concepción de España como un conglomerado de intereses contrapuestos puede aceptar que a cualquier comunidad autónoma deje de importarle la suerte de las demás. **El Gobierno central necesita del enfrentamiento entre territorios para engrasar su debilidad electoral y el Partido Popular pretende unir a los españoles.**

Reunidos en Madrid, a 6 de septiembre de 2024, de la mano del **presidente del Partido Popular, que se compromete a llevar a cabo cuando llegue al Gobierno de la Nación todas estas reformas**, respetuosas con la igualdad de todos los españoles y con nuestra autonomía y que, ante cualquier intento de apropiación ilegítima y egoísta, devuelve los recursos públicos a sus auténticos propietarios: todos los españoles.